

original

Manizales - Caldas, 24 de febrero de 2020

26 FEB 2020
108
2 copy

Señores

JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE MANIZALES

Referencia: **INCIDENTE DE DESACATO - ACCIÓN DE TUTELA-**
Radicado: **2020-00003 - 00**
Accionante: **MARTHA LILIANA VARGAS CLAVIJO**
Accionada: **NUEVA EPS**

MARTHA LILIANA VARGAS CLAVIJO, identificada como aparece al pie de mi correspondiente firma, me permito interponer **INCIDENTE DE DESACATO** en contra de la NUEVA EPS.

con base en los siguientes:

HECHOS

1. Mediante fallo de tutela con radicado número **2020 - 00003** del 30 de enero de 2020, me fue tutelado el DERECHOS CONSTITUCIONALES FUNDAMENTALES SEGURIDAD SOCIAL, A LA SALUD.
(...)
2. De acuerdo al fallo de tutela en el numeral segundo se manifiesta lo siguiente:

SEGUNDO: ORDENAR a la NUEVA EPS, por conducto de su representante legal o quien haga sus veces, para que dentro de 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia, proceda a autorizar y materializar efectivamente la cita con la especialidad de laringología que le fue ordenada a la accionante.

TERCERO: ORDENAR a la NUEVA EPS que autorice, suministre y cubra el 10% de los gastos de transporte y viáticos para la señora Martha Liliana Vargas Clavijo, desde la ciudad de Manizales Caldas, hasta la ciudad donde se le sea ordenada la realización de la cita médica por laringología.

(...)

3. Es de aclarar señor juez, que por parte de la NUEVA EPS, no he recibido ninguna respuesta, luego de transcurridas las 48 horas brindadas por su Despacho.

2

Por lo anterior, respetuosamente solicito lo siguiente:

PRETENSIONES

PRIMERO: Solicito se tomen las medidas pertinentes en contra de la NUEVA EPS las cuales están señaladas en los artículos 52 y 53 del Decreto 2591 de 1991 y reglamentado por el Decreto 306 de 1992, por no haber acatado el fallo de tutela en donde se ordena tutelar mi derecho fundamental.

PRUEBAS

- Copia del fallo de tutela radicado 2020-00006 del 22 de enero 2020.

NOTIFICACIONES

ACCIONADA:

NUEVA EPS
CRA 23 C N° 62 - 27 MANIZALES CALDAS.

ACCIONANTE:

- Calle 28 N° 14 - 54 barrio San José
- Celular: 3115470806 - 3113945800

Atentamente,



MARTHA LILIANA VARGAS CLAVIJO
C.C.N° 1.053.782.023 de Manizales Caldas

REPUBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO

Manizales, Caldas treinta (30) de enero de dos mil veinte (2020)

Acción de Tutela

Sentencia Tutela de primera instancia N° 03

Radicado 2020-00003

II. OBJETO DE DECISIÓN

Procede el Despacho a resolver la acción de tutela interpuesta por la señora Martha Liliana Vargas Clavijo contra la NUEVA EPS por la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, salud, seguridad social e integridad física y moral.

II. SUPUESTOS FACTICOS

2.1. Expuso la accionante que está afiliada en el régimen contributivo de salud en la Nueva EPS que tiene 32 años de edad y que actualmente presenta las siguientes patologías: polipos recurrentes de cuerdas vocales y de la laringe, hernia de columna, discopatía lumbar, hernia discal, artrosis de columna, dolor crónico, trastorno de depresión, ansiedad y rinitis crónica, motivo por el cual el médico tratante le ordenó desde el 4 de abril de 2019 valoración por la especialidad de laringología; sin embargo, dicha cita le ha sido programada para ser realizada en la ciudad de Bogotá y Medellín, no obstante, nunca le ha sido autorizada como tal.

2.2. Aseveró que no tiene los medios económicos para asumir los gastos de traslado a otra ciudad con la finalidad de asistir a la cita médica que requiere y la cual se ha dilatado injustificadamente por culpa atribuible a la entidad promotora de servicios de salud en la cual se encuentra afiliada.

2.3. Solicitó en consecuencia la protección de los derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, salud, seguridad social e integridad física y moral, y en ese sentido, imploró se ordene a la entidad accionada materializar efectivamente la cita médica por laringología con el tratamiento integral correspondiente y el reconocimiento de gastos de transporte, en caso tal que esta sea ordenada en otro municipio diferente al de su residencia.

III. ACTUACION PROCESAL

3.1. Por cumplir los requisitos previstos en los Decretos 2591 de 1991 y 1983 de 2017 este Juzgado admitió la acción de tutela mediante auto del 20 de enero de 2020 y ordenó notificación de las partes (Fol. 29 cuaderno principal).

3.2. Por su parte la NUEVA EPS señaló que no está vulnerando ninguno de los derechos fundamentales del accionante; además se opuso al reconocimiento de gastos de transporte y solicitó que no se profiera una sentencia integral. Finalmente deprecó que se ordene al ADRES el pago de las cuentas de cobro o suministro de medicamentos excluidos del Plan de Beneficios (Fls 34 y 40 ídem).

4
Señalado lo anterior, ante esta jurisdicción se decidió la litis planteada, previniendo lo siguiente y breve:

IV. CONSIDERACIONES

4.1. La acción de tutela se origina como uno de los principales logros de la reforma constitucional de 1991, toda vez que a través de este mecanismo cualquier ciudadano puede acudir a los estrados judiciales para solicitar la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando una persona natural, jurídica o una entidad haya trasgredido, vulnerado o amenace conculcar cualquiera de estos derechos:

4.2. El problema jurídico

Así las cosas, corresponde a este juzgado establecer si han sido trasgredidos los derechos fundamentales invocados por la señora Vargas Clavijo, debido a la tardanza de la EPS en materializar la orden de cita con el especialista en laringología, y de ser así, se entrará a verificar la procedencia de conceder el tratamiento integral y los gastos de transporte, en caso que la cita médica tenga que ser realizada en un municipio diferente al del domicilio de la accionante.

Entonces, para resolver los anteriores planteamientos, considera el despacho pertinente traer a colación una serie de lineamientos jurisprudenciales que serán aplicados a este caso, los cuales serán confrontados con el material probatorio que reposa en el expediente.

4.3. Protección del derecho de salud mediante la acción de tutela: Por medio de la sentencia T-010 de 2019 la Corte Constitucional reiteró su jurisprudencia en torno a la idoneidad y procedencia de la acción de tutela como mecanismo para la protección del derecho a la salud. En lo correspondiente señaló:

"Con fundamento en lo anterior, ha resaltado la Corte que el carácter autónomo del derecho a la salud permite que se pueda acudir a la acción de tutela para su protección sin hacer uso de la figura de la conexidad y que la irrenunciabilidad de la garantía "pretende constituirse en una garantía de cumplimiento de lo mandado por el constituyente."

En suma, tanto la jurisprudencia constitucional como el legislador estatutario han definido el rango fundamental del derecho a la salud con todos sus componentes y, en consecuencia, han reconocido que el mismo puede ser invocado vía acción de tutela cuando resulte amenazado o vulnerado, situación en la cual, los jueces constitucionales pueden hacer efectiva su protección y restablecer los derechos conculcados."

4.4. Pretensión de gastos de transporte y acompañante: En reciente pronunciamiento contenido en la sentencia T-081 de 2019 el órgano de cierre de la jurisdicción constitucional se refirió a las solicitudes de gastos de transporte y viáticos para un acompañante dentro de las acciones de tutela. En esta oportunidad manifestó:

"El servicio de transporte para pacientes y acompañantes. De conformidad con la Resolución No. 5857 de 2018, en algunas circunstancias, el servicio de transporte de pacientes está incluido en el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC. Estos eventos comprenden el traslado acuático, aéreo y terrestre (i) en ambulancia, cuando se presenten situaciones de urgencia o el servicio no pueda ofrecerse en la IPS donde el paciente está siendo atendido (art. 120); o, (ii) en medio diferente al ambulatorio, cuando la persona deba acceder a una

5

atención contemplada en el PBS y la misma no pueda ser prestada en el lugar de residencia del afiliado (art. 124).

Así, prima facie, esta Corporación ha admitido que fuera de los supuestos de hecho referidos en el párrafo que antecede, el servicio de transporte deberá ser sufragado por el paciente o su núcleo familiar. Empero, también ha identificado -esconarlos donde algunos usuarios del sistema de salud no pueden gozar del aludido servicio porque no está incluido en el PBS y requieren, en todo caso, bajo criterios de urgencia y necesidad, recibir los procedimientos médicos ordenados para tratar sus patologías. De manera que, con el fin de evitar que la imposibilidad de trasladarse derive en una barrera de acceso a los servicios de salud, la Corte ha reconocido que las EPS deben brindar este beneficio cuando (i) el paciente ni sus familiares cercanos tienen los recursos económicos suficientes para pagar el valor del traslado y (ii) que de no efectuarse la remisión se pone en riesgo la dignidad, la vida, la integridad física o el estado de salud del usuario.

Una de las situaciones no contemplada en el PBS con cargo a la UPC, es aquella en la que el usuario del sistema deba trasladarse con un acompañante, toda vez que este es totalmente dependiente para su desplazamiento o requiere atención permanente para garantizar su integridad física. En tal contexto, ha puesto de presente esta Corte que también deberá la EPS brindar el transporte del acompañante si se acredita su insuficiente capacidad económica (o la de su núcleo familiar)." (Subrayado del despacho).

Nótese que la jurisprudencia constitucional es clara en determinar que los gastos de transporte únicamente se reconocen en caso de incapacidad económica comprobada, cuando esta se constituye en una barrera de acceso para el servicio de salud.

Por otra parte, cuando se trata del reconocimiento de gastos de transporte con acompañante, es necesario que se demuestre que la enfermedad padecida por el usuario de salud le impida movilizarse por sí mismo o en su defecto requiera de ayuda para tal fin.

4.5. Reglas jurisprudenciales para reconocimiento de gastos de transporte: Mediante sentencia T-261/17, la corte constitucional reiteró su jurisprudencia en lo relativo a los supuestos que se deben cumplir para conceder gastos de transporte a través de la acción de tutela, los cuales corresponden a los siguientes:

"Esta Corporación ha considerado que la obligación de asumir el transporte de una persona se traslada a la EPS, solamente en casos en los que: (i) el procedimiento o tratamiento se considere indispensable para garantizar los derechos a la salud y a la integridad, en conexidad con la vida de la persona; (ii) de no efectuarse la remisión, se ponga en riesgo la vida, la integridad física o el estado de salud del afectado; y (iii) el paciente y sus familiares cercanos no cuenten con los recursos económicos para atenderlos."

Dentro del trámite probatorio se constatará la existencia de los anteriores supuestos en aras de determinar la posible prosperidad de este amparo.

4.6. Subreglas jurisprudenciales para acceder por vía tutela a los gastos de transporte y alojamiento en el sistema de salud y su nexo con el principio de integralidad: En la providencia T-206/13, la Corte Constitucional reiteró el vasto precedente que se ha edificado frente a esta temática:

"El servicio de transporte se encuentra dentro del POS y en consecuencia debía ser asumido por la EPS en aquellos eventos en los que (i) Un paciente sea remitido en ambulancia por una IPS a otra, cuando la primera no cuente con el servicio requerido; (ii) Se necesite el traslado

del paciente en cualquier momento para ser trasladado a domicilio bajo la responsabilidad de la EPS y según el criterio del médico tratante. (ii) Un paciente no hospitalizado debe acceder a un servicio que no esté disponible en el municipio de su residencia y trasladarlo al transporte en un medio adecuado en la cabecera. A partir de esta última condición, la jurisprudencia jurisprudencial en materia de gastos de transporte intermunicipal en el consentimiento a los siguientes eventos: (i) El servicio fue autorizado directamente por la EPS, trasladando a un prestador de un municipio de fuera de la cabecera del paciente. (ii) El paciente al acudir al servicio de salud, tiene los recursos económicos suficientes para pagar el valor del traslado. (iii) De no efectuarse la remisión se pone en riesgo la vida, la integridad física o el estado de salud del usuario. (iv) Si la atención médica en el lugar de comisión obligara más de un día de duración se cubren los gastos de alojamiento."

De la anterior jurisprudencia se concluye claramente que en el sub-lito el representado se encuentra en una de las situaciones descritas previamente, habida cuenta que debe acceder a servicios de salud ordenados para ser realizados por fuera de su lugar de residencia, y su núcleo familiar no tiene los recursos económicos suficientes para sufragar los gastos de transporte que esto conlleva.

4.7. Cubrimiento de gastos de transporte para paciente a cargo de la EPS: En consonancia con el pronunciamiento atrás relacionado, por medio de la misma sentencia citada con apelación, la H. Corporación Constitucional se pronunció haciendo alusión a la UPC diferencial en las zonas de dispersión y la UPC en zonas donde los gastos de transporte se cubren con cargo a la unidad de pago por capitación básica.

Las zonas que no son objeto de prima por dispersión, cuentan con la totalidad de infraestructura y personal humano para la atención en salud integral que requiera todo usuario, por consiguiente no se debería necesitar trasladarlo a otro lugar donde le sean suministradas las prestaciones pertinentes. En tal contexto, de ocurrir la remisión del paciente a otro municipio, ésta deberá afectar el rubro de la UPC general, como quiera que se presume que en el domicilio del usuario existe la capacidad para atender a la persona, y en caso contrario es responsabilidad directa de la EPS velar por que se garantice la asistencia médica. Ello no puede afectar el acceso y goce efectivo del derecho a la salud, so pena de constituirse en una barrera de acceso, que ha sido proscrita por la jurisprudencia constitucional. En conclusión, por una parte, en las áreas a donde se destine la prima adicional, esto es, por dispersión geográfica, los gastos de transporte serán cubiertos con cargo a ese rubro. Por otra, en los lugares en los que no se reconozca este concepto se pagarán por la unidad de pago por capitación básica. Las mismas reglas deberán aplicarse al alojamiento debido a que su necesidad se configura en las mismas condiciones que el traslado.

Según lo dicho preliminarmente se observa que en el Departamento de Caldas no aplica la prima adicional por dispersión geográfica, esto quiere decir que los gastos de transporte se cubren para esta zona del país a cargo de la unidad de pago por capitación.

4.8. Improcedencia del reconocimiento de la facultad de recobro a través de la providencias de tutela: Mediante sentencia T- 314 de 2017 la Corte Constitucional trazó dicho tema de la siguiente manera:

Al efecto, el Ministerio de Salud y Protección Social, por medio de la Resolución 3951 de 2016, previó un mecanismo para reconocer el cobro de los servicios sin cobertura y reguló el procedimiento para hacer efectivo el pago por parte de las entidades territoriales departamentales y distritales a los prestadores de servicios de salud, por los servicios y tecnologías sin cobertura en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), provistas a los afiliados al

Régimen Subsidiado de Salud, prescritos por el profesional de la salud u ordenados mediante providencia judicial. En consecuencia, las Entidades Promotoras de Salud deben acatar el procedimiento allí establecido para otorgar la correspondiente solicitud de cobro del servicio no cubierto por el PDS o cubierto pero que no tienen cargo a la unidad de pago por captación UPC.

Con esto, se evidencia que el juez constitucional no tiene competencia para decidir sobre la facultad de recobro respecto a los servicios excluidos del Plan de Beneficios o PBS por tratarse de un asunto administrativo que reviste una naturaleza económica, máxime si se tiene en cuenta que en este caso el servicio ordenado está cubierto por la UPC, pues se supone que en Caldas se encuentra disponible el servicio médico requerido por el menor, pero de manera inexplicable la EPS lo remite a otra ciudad alejada de su municipio de residencia, razón por la cual dicha entidad deberá cubrir su gasto de traslado haciendo uso de los recursos que le son girados por concepto de la UPC, lo que refuerza la imposibilidad de conceder el recobro deprecado.

4.9. Tratamiento integral como parte fundamental del derecho a la salud: Es importante hacer mención al tratamiento integral como uno de los avances más importantes que se ha logrado en el tema de protección del derecho a la salud y toda la edificación que ha construido la Corte Constitucional al respecto desde el año 1991, haciendo énfasis en los últimos pronunciamientos al respecto, en especial si se tiene en cuenta que esta temática ha sido reiterada en múltiples ocasiones, razón por la cual se considera pertinente traer a colación la sentencia T-259 de 2019 que señala lo siguiente:

"Según el artículo 8° de la Ley Estatutaria 1751 de 2015 el derecho fundamental y servicio público de salud se rige por el principio de integralidad, según el cual los servicios de salud deben ser suministrados de manera completa y con independencia del origen de la enfermedad o condición de salud. En concordancia, no puede fragmentarse la responsabilidad en la prestación de un servicio de salud específico en desmedro de la salud del usuario. Bajo ese entendido, ante la duda sobre el alcance de un servicio o tecnología de salud cubierta por el Estado, se entenderá que esto comprende todos los elementos esenciales para lograr su objetivo médico respecto de la necesidad específica de salud diagnosticada."

"En concordancia, recientemente en las Sentencias T-171 de 2018 y T-010 de 2019 se precisó que el principio de integralidad opera en el sistema de salud no solo para garantizar la prestación de los servicios y tecnologías necesarios para que la persona pueda superar las afecciones que perturban sus condiciones físicas y mentales, sino, también, para que pueda sobrellevar la enfermedad manteniendo su integridad y dignidad personal. Así como para garantizar el acceso efectivo."

El anterior pronunciamiento es traído a colación en vista de los recientes fallos de tutela donde se niega la referida prerrogativa legal, con fundamento en dos sentencias del año 2018 proferidas por la Corte Constitucional con ponencia del Magistrado José Fernando Reyes, sin embargo, esta providencia del año 2019, demuestra que es completamente procedente y legal otorgar el tratamiento integral en las sentencias de tutela.

Ahora bien, expuestos los fundamentos jurisprudenciales correspondientes al tema tratado, procederá el despacho a resolver lo que en derecho corresponda y sea del caso.

V. CASO CONCRETO

5.1. Se encuentra demostrado en el presente asunto que la accionante está afiliada a la NUEVA EPS en calidad de cotizante, del mismo que tiene 31 años de edad y que ha sido diagnosticada con: "pólipo de las cuerdas vocales y la laringe", motivo por el cual su médico tratante la ordenó una cita con la especialidad de laringología.

Consecuentemente, se constató que la NUEVA EPS ha tardado más de 9 meses en cumplir con la orden médica a través de la cual se dispuso la valoración por laringología para la señora Vargas, toda vez que la fórmula médica que reposa en el expediente data del 04 de abril de 2019, situación que evidencia claramente la trasgresión del derecho fundamental a la salud y seguridad social.

5.2. Probado lo anterior, se encuentra la contestación de esta acción de tutela por parte de la EPS, por medio de la cual señaló que no ha vulnerado los derechos invocados, debido a que ya autorizó el tratamiento médico requerido por el impetrante y que por ello está efectuando los trámites administrativos para prestar las atenciones de rigor.

No obstante lo anterior, la entidad promotora de servicios de salud no aportó prueba de la autorización y tampoco allegó informe de su materialización, escenario que le resta mérito a su defensa.

Adicionalmente, es necesario destacar que la accionante realizó una manifestación de carácter indefinido en los hechos de la acción de tutela, respecto a la incapacidad económica que tiene para atender los gastos de su traslado a otra ciudad con la finalidad de acudir a la cita médica con el especialista en laringología, sin embargo, ésta no fue refutada por la EPS accionada, pese a que este tipo de aseveraciones se constituyen en negaciones indefinidas que no requieren prueba, según lo establecido por el inciso final del artículo 167 del Código General del Proceso.

5.3. En efecto, con base en lo brevemente expuesto, se comprobó que existe una trasgresión de los derechos invocados por la accionante, conoquiera que de manera injustificada se ha negado la prestación de un servicio de salud que demanda desde hace más de 9 meses.

Paralelamente, se debe resaltar que en este asunto la impetrante está viendo truncada de manera injustificada la posibilidad de recibir un diagnóstico para iniciar el tratamiento de la enfermedad que padece, razón por la cual se considera que efectivamente se está presentando una vulneración de los derechos fundamentales a la vida, salud y seguridad social.

5.4. De igual modo, es pertinente recordar la vital importancia que le concede el máximo Órgano de Cierre Constitucional al cumplimiento de la orden emitida por el médico tratante y el deber de la EPS para suministrarlo, tal como fue recalcado mediante sentencia T-023/2013, donde señaló: Así las cosas, la remisión del médico tratante es la forma instituida en nuestro Sistema de Salud para garantizar que los usuarios reciben atención profesional especializada, y que los servicios de salud que solicitan, sean adecuados, y no exista riesgo para la salud, integridad o vida del usuario. La orden del médico tratante respalda el requerimiento de un servicio y cuando éste existe, es deber de la entidad responsable suministrarlo, esté o no incluido en la Plan Obligatorio de Salud. (Subrayado del Despacho).

Con esto se quiere decir que al importar el servicio médico solicitado, está o no incluido en el Plan de Beneficios, una vez exista la orden del médico tratante, tal como en el caso sub-
existente, es deber de la EPS suministrarlo.

Así las cosas, este despacho no encuentra necesario ahondar más en los argumentos que
dieron origen a este procedimiento constitucional para concluir que, obviamente, existe una
invasión de los derechos fundamentales invocados, por tanto, los mismos se protegerán
procediendo a ordenar a LA NUEVA EPS que autorice, programe y materialice la cita con la
especialidad de laringología que requiera la accionante.

Igualmente se concederá el tratamiento integral que llegará a requerir la señora Martha Liliana
Vargas Clavijo para la atención de la enfermedad denominada: "pólipo de las cuerdas vocales
y de la laringe", de conformidad con lo señalado por Artículo 8° de la Ley 1751 de 2016 y la
jurisprudencia constitucional. Este diagnóstico se visualiza en el folio número 7 del expediente.

5.5. Por otra parte, este despacho accederá a la pretensión de gastos de transporte,
conociendo que la entidad accionada no logró demostrar la capacidad económica de la
señora Vargas o de su núcleo familiar para asumirlas, escenario en el cual se cumplen las
reglas jurisprudenciales para acceder a tal pedimento.

Estos gastos serán concedidos siempre y cuando la cita médica con el especialista en
laringología sea ordenada para ser realizada en otro municipio o ciudad diferente a Manizales,
toda vez que en la autorización del servicio médico que no fue cumplida, la EPS dispuso que
la cita sería realizada en la "Fundación Hospital Infantil Universitario San José" de la ciudad de
Bogotá.

Empero, no se accederá a los viáticos para un acompañante, habida cuenta que dentro del
plehario no se probó que la señora Vargas sufiera alguna enfermedad o patología que le
obligue a movilizarse o desplazarse con la ayuda o el acompañamiento de alguna persona.

5.6. De otro lado, no es de recibo la solicitud de facultar el cobro por los servicios excluidos del
Plan de Beneficios que deba asumir la EPS tutelada, habida consideración que por virtud de la
ley opera dicha facultad, motivo por el cual no es procedente acceder a lo pedido en tal
sentido.

Desde luego, es necesario señalar que el juez constitucional no tiene la facultad para autorizar
el recobro de pagos por los servicios médicos excluidos del Plan de Beneficios ante el ADRES
(Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud), pues se
trata de un asunto administrativo de contenido económico, por lo cual la EPS debe acudir a los
mecanismos administrativos dispuestos en la ley para tal fin.

En ese orden de ideas y por lo anteriormente discurrido, el JUZGADO TERCERO CIVIL DEL
CIRCUITO DE MANIZALES, CALDAS, administrando Justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: TUTELAR los derechos constitucionales fundamentales a la "salud y seguridad
social", invocados por la señora Martha Liliana Vargas Clavijo en la presente acción de tutela
interpuesta contra la NUEVA EPS.

SEGUNDO: ORDENAR a la NUEVA EPS, por conducto de su representante legal o quien
haga sus veces, para que dentro de las 48 horas siguientes la la notificación de esta

10

providencia, proceda a autorizar y materializar efectivamente la cita con la especialidad de laringología que le fue ordenada a la reclamante.

TERCERO: ORDENAR a la Nueva EPS que autorice, suministre y cubra el 100% de los gastos de transporte y viáticos para la señora Martha Lilliana Vargas Clavijo, desde la ciudad de Manizales, Caldas, hasta la ciudad donde le sea ordenada la realización de la cita médica por laringología.

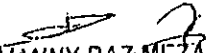
PARÁGRAFO: La anterior orden será aplicable y vigente cada vez que el procedimiento médico ordenado deba ser efectuado fuera de la ciudad de Manizales.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La orden de traslado no incluye gastos para acompañante por los motivos expuestos previamente.

CUARTO: ORDENAR a la NUEVA EPS, por conducto de su representante legal o quien haga sus veces, autorizar la atención o tratamiento integral a la señora Martha Lilliana Vargas Clavijo, según sea dispuesto por el galeno tratante en lo que tiene que ver con el diagnóstico: "pólipo de las cuerdas vocales y de la laringe", de conformidad con lo señalado por Artículo 8° de la Ley 1751 de 2015 y la jurisprudencia constitucional.

QUINTO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más expedito y ordenar la remisión del expediente ante la Corte Constitucional para su eventual revisión, sino fuere objeto de impugnación dentro de los tres días siguientes contados a partir de la notificación de la presente providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


GEOVANNY PAZ MEZA
JUEZ